

2.20. JURISPRUDENCIA AMBIENTAL DE LA UNIÓN EUROPEA (pp. 2-17)

—

2.20. JURISPRUDÈNCIA AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA (pp. 18-33)

ANTONIO CARDESA SALZMANN

Investigador postdoctoral

CEDAT / Universitat Rovira i Virgili

Sumario: 1. Consideraciones introductorias. 2. Recursos por incumplimiento (artículo 258 TFUE / ex artículo 226 TCE). 2.1 Protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. 2.2. Calidad de las aguas de baño. 2.3. Conservación de la flora y fauna. 2.4. Gestión de residuos. 2.5. Evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 2.6. Prevención y control integrados de la contaminación. 3. Cuestiones prejudiciales (artículo 267 TFUE / ex artículo 234 TCE). 3.1. Cuestiones prejudiciales de interpretación. 3.2. Cuestiones prejudiciales de validez.

1. Consideraciones introductorias

En el período comprendido entre el 1 de junio y el 30 de noviembre de 2010, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado sentencia en once asuntos relacionados con el Derecho ambiental. Entre estas sentencias, nueve fueron dictadas en el marco de procedimientos incoados por la Comisión Europea sobre la base del artículo 258 TFUE contra varios Estados miembros por el incumplimiento del Derecho de la Unión Europea en relación con varias directivas en materia de (1) protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias; (2) en materia de calidad de las aguas de baño; (3) de conservación de la flora y fauna; (4) de gestión de residuos; (5) de evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente; y (6) de prevención y control integrados de la contaminación.

Las otras dos sentencias fueron dictadas en el marco de sendas peticiones de decisión prejudicial. En particular, la sentencia de 17 de junio de 2010, as. ac. C-105/09 y C-110/09, *Terre wallonne ASBL (C-105/09), Inter-Environnement Wallonie ASBL (C-110/09) c/ Région wallonne*, responde a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Conseil d'État de Bélgica sobre la interpretación de determinadas disposiciones de las Directivas 2001/42/CE y 91/676/CEE. Por otro lado, la sentencia de 8 de julio de 2010, as. C-343/09, *Afton Chemical Limited c/ Secretary of State for Transport*, resuelve una cuestión prejudicial de validez sobre el artículo 1, apartado 8, de la Directiva 2009/30/CE, por la que se modifica la Directiva 98/70/CE en relación con las especificaciones de la gasolina, el diésel y el gasóleo, se introduce un mecanismo para controlar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

2. Recursos por incumplimiento (artículo 258 TFUE/ ex artículo 226 TCE)

2.1. Protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrícolas

Nos ocuparemos de la Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 29 de junio de 2010, as. C-526/08, Comisión Europea c/ Gran Ducado de Luxemburgo. En esta sentencia el Tribunal de Justicia se pronunció sobre el recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión Europea contra Luxemburgo, al considerar que este Estado miembro no había adaptado correctamente el Derecho nacional —a través de los artículos 6, 7 y 8 del Reglamento granducal de 24 de noviembre de 2000, sobre la utilización de fertilizantes nitrogenados en la agricultura— a los artículos 4 y 5 de la Directiva 91/676/CE y a los anexos II, parte A, puntos 1, 2, 5 y 6, y III, apartado 1, puntos 1 y 2, de dicha Directiva¹. Al margen de las alegaciones sobre el fondo presentadas en el marco de su respuesta al dictamen motivado de la Comisión Europea, una vez en fase jurisdiccional Luxemburgo no realizó ninguna alegación sobre la procedencia del recurso, ni solicitó su desestimación. Por el contrario, basó su estrategia de defensa exclusivamente en la inadmisibilidad, alegando por lo esencial la violación del principio de cosa juzgada y del principio non bis in idem, habida cuenta de la identidad de hecho y de Derecho entre el recurso de la Comisión y la sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de marzo de 2001, as. C-266/00, Comisión Europea c/ Gran Ducado de Luxemburgo². Esta alegación, que motivó la atribución del asunto a la Gran Sala, fue desestimada por el Tribunal. Una vez admitido el recurso, las alegaciones sobre el fondo presentadas por Luxemburgo en el escrito de dúplica fueron desestimadas por extemporáneas, resolviendo por consiguiente el Tribunal exclusivamente sobre la base de los cuatro motivos incoados por la Comisión³. Estos motivos, todos ellos apreciados por el Tribunal, son los siguientes:

1. Al establecer los períodos durante los cuales no pueden utilizarse fertilizantes en los terrenos agrícolas, el artículo 6 del Reglamento granducal no extiende la prohibición a los abonos químicos, y no prevé ningún período de prohibición completa para los

¹ Sentencia, § 10.

² Rec. 2001, p. I-2073

³ Sentencia, §§ 49-51.

pastos. En este contexto, el artículo 7 del Reglamento granducal define de manera insuficiente el marco de las excepciones a dichas prohibiciones, de manera incompatible con la Directiva 91/676/CEE.

2. El artículo 8 del Reglamento granducal sólo impone una capacidad de almacenamiento del estiércol líquido y de purines de, como mínimo, seis meses únicamente para instalaciones nuevas, mientras que la Directiva 91/676/CEE extiende dicho estándar también a las instalaciones existentes.

3. De conformidad con el anexo II, parte A, punto 2 de la Directiva 91/676/CEE, la normativa nacional debe regular la aplicación de todo tipo de fertilizantes a tierras en terrenos inclinados y escarpados, mientras el artículo 6, parte A, punto 5 del Reglamento granducal sólo regula dicho aspecto respecto del estiércol líquido, purines y lodos de depuradora líquidos, sin extender dicha prohibición a los abonos químicos.

4. Por último, Luxemburgo no había adoptado ninguna disposición relativas a los procedimientos para la aplicación a las tierras de fertilizantes químicos y estiércol que mantengan las pérdidas de nutrientes en las aguas a un nivel aceptable, según se exige en el anexo II, parte A, punto 6 de la Directiva 91/676/CEE.

2.2. Calidad de las aguas de baño

En este caso, vamos a analizar la *Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 30 de septiembre de 2010, as. C-481/09, Comisión Europea c/ República Checa*. El Tribunal de Justicia declaró el incumplimiento por parte de la República Checa de sus obligaciones de conformidad con la Directiva 2006/7/CE⁴ por falta de la adopción de las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para adaptar su ordenamiento jurídico interno a la misma dentro del plazo establecido en su artículo 18 (24 de marzo de 2008). A estos efectos, siguiendo su línea jurisprudencial muy constante, el Tribunal de Justicia únicamente tomó en consideración la situación del ordenamiento jurídico interno a la fecha de la expiración del plazo fijado en el dictamen

⁴ Directiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006, relativa a la gestión de la calidad de las aguas de baño y por la que se deroga la Directiva 76/160/CEE (DOUE, L 64, de 4 de marzo de 2006, pp. 37-51).

motivado de la Comisión Europea, sin prestar atención a ulteriores cambios en el mismo.

2.3. Conservación de la flora y fauna

En el período comprendido en la presente crónica, el Tribunal de Justicia ha dictado dos sentencias relativas a recursos de incumplimiento interpuestos por la Comisión contra Austria e Italia, respectivamente, por transposición insuficiente o incorrecta de la Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres⁵ en la legislación estatal y regional. Se trata de la sentencia Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 15 de julio de 2010, as. C-573/08, Comisión Europea c/ República Italiana, y de la sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 14 de octubre de 2010, as. C-535/07, Comisión Europea c/ República de Austria.

No obstante, interesa destacar las sentencias adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativas a sendos recursos de incumplimiento interpuestos contra España e Italia, en relación con la Directiva hábitats.

En primer lugar, destaca la *Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 20 de mayo de 2010, as. C-308/08, Comisión Europea c/ Reino de España*. Por medio de esta sentencia, el Tribunal de Justicia resuelve el recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión Europea contra España, por el que solicitaba la declaración del incumplimiento de las obligaciones que se derivan para dicho país de la Directiva 92/43/CEE⁶ (Directiva hábitats), tal como fue interpretada, según la interpretación que le fue dada en las sentencias de 13 de enero de 2005, as. C-117/03, Dragaggi y otros⁷, y de 14 de septiembre de 2006, as. C-244/05, Bund Naturschutz in Bayern y otros⁸, en relación con el proyecto de acondicionamiento del camino rural de Villamanrique de la Condesa (Sevilla) a El Rocío (Huelva). En particular, la Comisión consideraba que España incumplía (1) la obligación de no autorizar una intervención que altere

⁵ DOCE, L 103, de 25 de abril de 1979, pp. 1-18.

⁶ Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DOCE, L 206, de 22 de julio de 1992, pp. 7-50).

⁷ Rec., p. I-167.

⁸ Rec., p. I-8445.

significativamente las características ecológicas del Parque de Doñana, en tanto que ‘lugar de interés comunitario’ (LIC), así como (2) la obligación de establecer un sistema de control de las caputras o sacrificios accidentales del lince ibérico, de conformidad con el artículo 12.4 de la Directiva hábitats.

Por su parte, España alegó en esencia que la vía de comunicación comarcal entre Villamanrique y El Rocío había sido ya una vía asfaltada antes de la catalogación del Parque de Doñana como LIC, y que la intervención practicada se limitó a la manutención de la carretera, sin que se hubiese producido una alteración significativa de las características ecológicas del lugar.

En su sentencia, el Tribunal de Justicia desestimó el recurso de la Comisión. En particular, el Tribunal consideró que los elementos de prueba que le fueron sometidos no permitían concluir que el proyecto de acondicionamiento del camino rural, acompañado de determinadas medidas correctoras que fueron ejecutadas todavía durante la fase precontenciosa, constituyese ‘en si mismo’ una intervención que conlleve el riesgo de provocar la desaparición del lince ibérico y la alteración de las características ecológicas del lugar⁹. Según la singular apreciación del Tribunal, las pruebas periciales aportadas no demostrarían suficientemente que el proyecto en cuestión tuviese “... una incidencia real en la fragmentación del hábitat del lince ibérico en la comarca de Doñana”¹⁰. Por otro lado, a pesar de que la muerte por atropello es una de las principales causas de mortalidad del lince, y a pesar también de las pruebas aportadas sobre el incremento de la velocidad media de circulación por dicha carretera, el Tribunal consideró que la ausencia de casos de atropello desde la aplicación de las medidas de corrección del proyecto de acondicionamiento (hasta el fin de la fase escrita del procedimiento) le impedían considerar suficientemente probado su incidencia sobre el riesgo de desaparición del lince ibérico en dicho lugar¹¹. Por esta misma razón desestimó el segundo motivo del recurso, a saber, el supuesto incumplimiento del artículo 12.4 de la Directiva hábitats.

⁹ Sentencia, § 52.

¹⁰ *Ibid.*, § 36.

¹¹ *Ibid.*, §§ 37-51.

En segundo lugar, haremos referencia a la *Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 10 de junio de 2010, as. C-491/08, Comisión Europea/República Italiana*. En esta sentencia, el Tribunal de Justicia estima el recurso interpuesto por la Comisión Europea contra Italia sobre la base del artículo 226 TCE, solicitando la declaración del incumplimiento de las obligaciones que le incumben a dicho Estado miembro en virtud de la Directiva 92/43/CEE (Directiva hábitats), en relación con el proyecto de complejo turístico e inmobiliario ‘Is Arenas’, que afecta a las especies y los hábitats presentes sobre el ‘lugar de interés comunitario’ (LIC) ‘Is Arenas’. Concretamente, la Comisión reprochaba a Italia que: (1) entre la propuesta de inscripción de ‘Is Arenas’ en la lista LIC en mayo de 1995 y su inscripción formal en la misma¹² (19 de julio de 2006), no había adoptado las medidas de protección necesarias para salvaguardar el interés ecológico del sitio y, en particular, no había prohibido una intervención susceptible de comprometer gravemente las características ecológicas del mismo (art. 10 TCE, en relación con el art. 6 Directiva hábitats); y (2) después del 19 de julio de 2006, no había adoptado las medidas apropiadas para evitar el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de especies, ni las perturbaciones que afectan a las especies para las que se había establecido el LIC (art. 6.2 Directiva hábitats). El Tribunal estimó el recurso de la Comisión, declarando el incumplimiento de Italia en todos los extremos indicados en el dictamen motivado y en el dictamen motivado complementario.

2.4. Gestión de residuos

En este apartado, debemos mencionar la *Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 10 de junio de 2010, as. C-37/09, Comisión Europea c/ República Portuguesa*. Por medio de esta sentencia, el Tribunal de Justicia estima parcialmente el recurso interpuesto por la Comisión Europea contra Portugal, sobre la base del artículo 226 TCE, alegando el incumplimiento por dicho Estado miembro de sus obligaciones de

¹² 2006/613/CE: Decisión de la Comisión, de 19 de julio de 2006, por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea [notificada con el número C(2006) 3261] (DOUE, L 259, de 21 de septiembre de 2006, pp. 1-104).

conformidad con la Directiva 2006/12/CE¹³ y con la Directiva 80/68/CEE¹⁴, en relación con los vertederos ilegales existentes en las canteras abandonadas dos Limas, dos Linos y dos Barreiras, situadas en la parroquia de Lourosa. El Tribunal desestimó el recurso de la Comisión en cuanto a al pretendido incumplimiento de dichas obligaciones por Portugal en relación con los vertidos ilegales de residuos en la antigua cantera dos Barreiras, al considerar que la Comisión no había aportado elementos de prueba suficientes que permitiesen deducir que, en el momento de expirar el plazo señalado en el dictamen motivado, la situación de dicha pedrera fuese tal que permitiese afirmar que Portugal no había cumplido sus obligaciones de conformidad con las Directivas en cuestión¹⁵. Respecto de las canteras abandonadas dos Limas y dos Linos, el Tribunal estimó el recurso. En particular, consideró que Portugal había incumplido sus obligaciones en relación con:

1. La adopción de las medidas necesarias para garantizar que los residuos se valorizarán o se eliminarán sin poner en peligro la salud del hombre y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar el medio ambiente (art. 4 Directiva 2006/12/CE), en la medida en que consideró probado que las autoridades portuguesas se habían limitado a enterrar los residuos depositados ilegalmente en dichas canteras durante varios años, hasta 2004, contribuyendo así a prolongar una situación de daño ambiental significativo ocasionado por la presencia previa de dichos residuos¹⁶;
2. La adopción de las disposiciones necesarias para que todo poseedor de residuos los remita a un recolector privado o público o a una empresa, o se ocupe él mismo de la valorización o la eliminación de los mismos (art. 8 Directiva 2006/12/CE), en la medida en que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal¹⁷, el propietario de un vertedero

¹³ Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, relativa a los residuos (DOUE, L 114, de 27 de abril de 2006, pp. 9-21).

¹⁴ Directiva 80/68/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1979, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas (DOCE, L 20, de 26 de enero de 1980, pp. 43-48; edición especial en español: Capítulo 15 Tomo 2 p. 162).

¹⁵ Sentencia, § 31.

¹⁶ *Ibid.*, §§ 38 y 39.

¹⁷ Vid. en particular, sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de noviembre de 1999, as. C-365/97, Rec., p. I-7773, § 108.

ilegal debe ser considerado ‘poseedor’ de los residuos ahí depositados en el sentido del artículo 8 de la Directiva 2006/12/CE¹⁸;

3. La adopción de las medidas necesarias para limitar la introducción en las aguas subterráneas de determinadas sustancias con el fin de evitar su contaminación (arts. 3, b) y 5 Directiva 80/68/CEE, en relación con su Anexo, lista II). A este respecto, el Tribunal tuvo particularmente en cuenta que las autoridades portuguesas no adoptaron en todo el tiempo en que se produjeron los depósitos ilegales, ni tampoco después de 2004, las precauciones técnicas requeridas para evitar la contaminación de las aguas subterráneas por dichas sustancias, tales como la instalación de una barrera protectora que impida el flujo de residuos líquidos de la filtración del agua a través de ellos¹⁹.

2.5. Evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente

En esta materia, destaca la *Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 10 de junio de 2010, as. C-378/09, Comisión Europea c/ República Checa*. Por medio de esta sentencia, el Tribunal de Justicia resuelve un recurso de incumplimiento interpuesto por la Comisión Europea contra la República Checa basado en la transposición incorrecta de los tres primeros párrafos del artículo 10 bis de la Directiva 85/337/CEE²⁰, según fue modificada por la Directiva 2003/35/CE²¹. De conformidad con dicha disposición,

“Los Estados miembros garantizarán que, de conformidad con su Derecho interno, los miembros del público interesado:

- a) que tengan un interés suficiente, o subsidiariamente;
- b) que sostengan el menoscabo de un derecho, cuando la legislación en materia de procedimiento administrativo de un Estado miembro lo imponga como requisito

¹⁸ Sentencia, § 54.

¹⁹ *Ibid.*, §§ 74-78.

²⁰ Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DOCE, L 175, de 5 de julio de 1985, p. 40).

²¹ Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo (DOUE, L 156, de 25 de junio de 2003, pp. 17-25).

previo, tengan la posibilidad de presentar un recurso ante un tribunal de justicia o ante otro órgano independiente e imparcial establecido por la ley para impugnar la legalidad, en cuanto al fondo o en cuanto al procedimiento, de decisiones, acciones u omisiones que caigan dentro del ámbito de las disposiciones relativas a la participación del público de la presente Directiva.

Los Estados miembros determinarán la fase en la que pueden impugnarse tales decisiones, acciones u omisiones.

Los Estados miembros determinarán, de manera coherente con el objetivo de facilitar al público interesado un amplio acceso a la justicia, lo que constituya el interés suficiente y el menoscabo de un derecho. Se considerará que toda organización no gubernamental que cumple los requisitos contemplados en el apartado 2 del artículo 1 tiene siempre el interés suficiente a efectos de la letra a) del presente artículo o acredita el menoscabo de un derecho a efectos de la letra b).”

De conformidad con el artículo 6 de la Directiva 2003/35/CE, los Estados miembros debían poner en vigor las medidas de transposición necesarias hasta el 25 de junio de 2005. En julio de 2006, la Comisión Europea advirtió a la República Checa que, habida cuenta de las restricciones que comporta, su legislación nacional no reconocía el derecho de recurso contra las decisiones, actos y omisiones al conjunto del público interesado en el sentido del artículo 1.2 de la Directiva 85/337/CEE, en particular en lo referente a las organizaciones no gubernamentales²². La República Checa no cuestionó la posición de la Comisión Europea a lo largo de la fase precontenciosa. Ante las reiteradas dificultades en la tramitación parlamentaria del proyecto legislativo destinado a trasponer correctamente la directiva en cuestión y, en última instancia, su rechazo por el Parlamento checo, la Comisión Europea interpuso el recurso. Siguiendo su jurisprudencia constante en la materia, el Tribunal de Justicia admitió el recurso y declaró el incumplimiento por parte de la República Checa de las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 85/337/CEE, según fue modificada por la Directiva 2003/35/CE, al no haber transpuesto correctamente su artículo 10 bis en el plazo establecido.

²² Sentencia, § 6.

2.6. *Prevención y control integrados de la contaminación*

En el ámbito de la prevención y el control integrados de la contaminación, debe destacarse la *Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 7 de octubre de 2010, as. 49/10, Comisión Europea c/ República de Eslovenia*. En este asunto, el Tribunal de Justicia resuelve un recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión Europea contra Eslovenia por el supuesto incumplimiento de las obligaciones que le incumben de conformidad con el artículo 5.1 de la Directiva 2008/1/CE²³. A tenor de dicha disposición, los Estados miembros deben adoptar "... las medidas necesarias para que las autoridades competentes velen, mediante autorizaciones extendidas de conformidad con los artículos 6 y 8 o, de forma adecuada, mediante la revisión de las condiciones y, en su caso, su actualización, por que las instalaciones existentes sean explotadas con arreglo a los requisitos previstos en los artículos 3, 7, 9, 10, 13, en el artículo 14, letras a) y b), y en el artículo 15, apartado 2, a más tardar el 30 de octubre de 2007...". A los efectos de dicha directiva, debe entenderse por 'instalación existente' "...una instalación que, a fecha de 30 de octubre de 1999 y en el marco de la legislación existente antes de dicha fecha, estaba en funcionamiento o había sido autorizada o había sido objeto, en opinión de la autoridad competente, de una solicitud completa de autorización, siempre que dicha instalación se hubiera puesto en servicio a más tardar el 30 de octubre de 2000" (art. 2.4 Directiva 2008/1/CE).

En la fecha indicada en el artículo 5.1, sólo el 12% de las 'instalaciones existentes' eslovenas disponían de la autorización correspondiente. Aunque la administración eslovena incrementó sus capacidades y aceleró el trámite de las autorizaciones pendientes, 57 de las 157 'instalaciones existentes' aún funcionaban sin autorización al expirar el plazo otorgado en el dictamen motivado de la Comisión. Una vez en fase contenciosa, conforme a su jurisprudencia constante, el Tribunal de Justicia no estimó las alegaciones del Estado miembro relativas a las dificultades de orden interno como justificación del retraso en el cumplimiento de las obligaciones comunitarias. Por consiguiente, el Tribunal declaró que, no habiendo adoptado en el plazo prescrito todas las medidas necesarias en materia de autorización de las instalaciones industriales, de

²³ Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (Versión codificada) (DOUE, L 24, de 29 de enero de 2008, pp. 8-29).

conformidad con el artículo 5.1 de la Directiva 2008/1/CE, Eslovenia ha incumplido sus obligaciones de conformidad con la misma.

3. Cuestiones prejudiciales (artículo 267 TFUE / ex artículo 234 TCE)

3.1. Cuestiones prejudiciales de interpretación

En el período comprendido por la presente crónica, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado, con carácter prejudicial, sobre el ámbito de aplicación de la Directiva 2001/42/CE, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

Mencionemos la *Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 17 de junio de 2010, peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Conseil d'État (Bélgica), as. ac. C-105/09 y C-110/09, Terre wallonne ASBL (C-105/09), Inter-Environnement Wallonie ASBL (C-110/09) c/ Région wallonne*. En el litigio principal las demandantes solicitaron ante el Conseil d'État de Bélgica la anulación del Decreto de 17 de marzo de 2005, adoptado por el Gobierno valón en transposición del artículo 5 de la Directiva 91/676/CEE, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura, en la medida en que establece un programa de acción relativo a la gestión del nitrógeno para la agricultura en zonas vulnerables, que no fue sometido a evaluación medioambiental conforme a la Directiva 2001/42/CE²⁴. En este contexto, el Conseil d'État formuló las siguientes cuestiones prejudiciales:

“1) ¿Es el programa de gestión del nitrógeno relativo a las zonas vulnerables designadas, prescrito por el artículo 5, apartado 1, de la [Directiva 91/676] un plan o programa en el sentido del artículo 3, apartado 2, [letra] a), de la [Directiva 2001/42], destinado a los sectores de la agricultura, la silvicultura, la pesca, la energía, la industria, el transporte, la gestión de residuos, la gestión de recursos hídricos, las telecomunicaciones, el turismo, la ordenación del territorio urbano y rural o la utilización del suelo, y establece el citado programa de gestión el marco para la autorización en el futuro de proyectos enumerados en los anexos I y II de la [Directiva 85/337]?”

²⁴ Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (DOCE, L 197, de 21 de julio de 2001, p. 30-37.

2) ¿Es el programa de gestión del nitrógeno relativo a las zonas vulnerables designadas, prescrito por el artículo 5, apartado 1, de la [Directiva 91/676] un plan o programa en el sentido del artículo 3, apartado 2, [letra] b), de la [Directiva 2001/42] para el que, dados los efectos que puede producir en determinados lugares, se requiere una evaluación en virtud de los artículos 6 y 7 de la [Directiva 92/43], en particular cuando el programa de gestión del nitrógeno de que se trata se aplica a todas las zonas vulnerables designadas de la Región Valona?

3) ¿Es el programa de gestión del nitrógeno relativo a las zonas vulnerables designadas, prescrito por el artículo 5, apartado 1, de la [Directiva 91/676] un plan o programa, distinto de los referidos en el artículo 3, apartado 2, de la [Directiva 2001/42], que establece el marco para la autorización en el futuro de proyectos, para los que los Estados miembros deben determinar, en virtud del artículo 3, apartado 4 [de la Directiva 2001/42], si pueden tener efectos significativos en el medio ambiente, de acuerdo con [el artículo 3, apartado 5, de dicha Directiva]?”²⁵.

El Tribunal contestó afirmativamente a la primera cuestión remitida, por lo que no fue necesario responder a las demás. Partiendo de la constatación de que el objetivo esencial de la Directiva 2001/42/CE consiste en someter a evaluación medioambiental los planes y programas que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente, durante su preparación y antes de su adopción, estableciendo a estos efectos normas mínimas sobre la preparación del informe, la aplicación del procedimiento de consulta, la consideración de los resultados de la evaluación medioambiental y el suministro de información sobre la decisión finalmente adoptada, el Tribunal procedió, en primer lugar, a analizar si los programas de acción elaborados de conformidad con el artículo 5.1 de la Directiva 91/696/CEE deben ser considerados como ‘planes y programas’ en el sentido del artículo 2, a) de la Directiva 2001/42/CE y, en segundo lugar, si reúnen los requisitos exigidos en el artículo 3.2, a) de la misma.

Respecto de la consideración de los programas de acción como ‘planes y programas’ en el sentido del artículo 2, a) de la Directiva 2001/42/CE, el Tribunal se basa, por un lado, en una interpretación literal de dicha disposición, y por el otro, en la exclusión de los programas de acción contemplados en el artículo 5 de la Directiva 91/696/CEE del

²⁵ Sentencia, § 30.

ámbito de aplicación de la Directiva 2003/35/CE²⁶, para concluir afirmativamente sobre su cabida en dicha categoría. En relación con los requisitos exigidos en el artículo 3.2,a) de la Directiva 2001/42/CE, el Tribunal estimó que los programas de acción contemplados en el artículo 5.1 de la Directiva 91/676/CEE se corresponden plenamente con uno de los sectores enumerados en dicha disposición y apreció la existencia de indicios –a tomar en consideración por el juez nacional – para determinar que constituyen por lo demás –según se exige también en el artículo 3.2,a) Directiva 2001/42– el marco para la autorización en el futuro de proyectos enumerados en los anexos I y II de la Directiva 85/337/CEE. Por consiguiente, el Tribunal de Justicia estimó que “... un programa de acción adoptado en virtud del artículo 5, apartado 1 de la Directiva 91/676 es, en principio, un plan o un programa contemplado en el artículo 3, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/42 en la medida en que constituye un ‘plan’ o un ‘programa’ en el sentido del artículo 2, letra a) de esta última Directiva, y contiene medidas cuyo respeto es determinante para autorizar la realización de proyectos enumerados en los anexos I y II de la directiva 85/335”²⁷.

3.2. Cuestiones prejudiciales de validez

En el período comprendido por la presente crónica, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resuelto una cuestión prejudicial de validez relevante en el ámbito de la legislación de la Unión Europea en materia de contaminación atmosférica.

Se trata de la *Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 8 de julio de 2010, as. C-343/09, Afton Chemical Limited c/ Secretary of State for Transport*. Por medio de esta sentencia, el Tribunal de Justicia responde a una serie de cuestiones prejudiciales planteadas por la High Court of Justice of England and Wales, Queen’s Bench Division (Administrative Court) en el marco del recurso de control de legalidad (judicial review) interpuesto por Afton Chemical Limited en relación con la intención y obligación del

²⁶ Cf art. 2.5 y Anexo I de la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo (DOUE, L 156, de 25 de junio de 2003, pp. 17-25).

²⁷ Sentencia, § 55.

Gobierno del Reino Unido de adaptar el Derecho interno a la Directiva 2009/30/CE²⁸. En particular, las cuestiones prejudiciales remitidas por el órgano jurisdiccional inglés versaban sobre la validez del artículo 1.8 de dicha directiva, en la medida en que inserta un nuevo artículo 8 bis en la Directiva 98/70/CE²⁹, que tiene por objeto la limitación sustancial del uso de tricarbonilo metilciclopentadienilo de manganeso (MMT) — sustancia producida por la demandante en el litigio principal— en los combustibles. Concretamente, las cuestiones prejudiciales remitidas fueron planteadas en los siguientes términos:

“Con respecto a las disposiciones sobre aditivos metálicos contenidas en la Directiva 2009/30/CE [...]:

1) Por lo que se refiere a la parte del artículo 1, apartado 8, que inserta un nuevo artículo 8 bis, apartado 2 en la Directiva 98/70, limitando el uso del [MMT] en los combustibles a 6 mg de manganeso por litro a partir del 1 de enero de 2011 y a 2 mg a partir del 1 de enero de 2014, ¿es la imposición de dichos límites:

- a) contraria a Derecho por estar basada en un error manifiesto de apreciación;
- b) contraria a Derecho por no respetar las exigencias del principio de cautela;
- c) contraria a Derecho por adolecer de falta de proporcionalidad;
- d) contraria a Derecho por vulnerar el principio de seguridad jurídica?

2) Por lo que se refiere a la parte del artículo 1, apartado 8, que inserta un nuevo artículo 8 bis, apartados 4 a 6, en la Directiva 98/70, exigiendo el etiquetado de todos los combustibles que contengan aditivos metálicos con la frase ‘Contiene aditivos metálicos’, ¿es la imposición de dicho requisito de etiquetado:

- a) contraria a Derecho por estar basada en un error manifiesto de apreciación;
- b) contraria a Derecho por adolecer de falta de proporcionalidad?”³⁰.

²⁸ Directiva 2009/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, por la que se modifica la Directiva 98/70/CE en relación con las especificaciones de la gasolina, el diésel y el gasóleo, se introduce un mecanismo para controlar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, se modifica la Directiva 1999/32/CE del Consejo en relación con las especificaciones del combustible utilizado por los buques de navegación interior y se deroga la Directiva 93/12/CEE (DOUE, L 140, de 5 de junio de 2009, pp. 88-113).

²⁹ Directiva 98/70/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1998 relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo y por la que se modifica la Directiva 93/12/CEE del Consejo (DOCE, L 350, de 28 de diciembre de 1998, pp. 58-68).

³⁰ Sentencia, § 9.

El Tribunal de Justicia respondió negativamente a ambas cuestiones. Interesa en particular resaltar el razonamiento seguido al abordar la primera de las cuestiones remitidas. En cuanto a la posible concurrencia de un error manifiesto de apreciación de los hechos científicos y técnicos por parte de las Instituciones de la Unión Europea (en particular, el Parlamento y el Consejo), el Tribunal de Justicia partió del reconocimiento de la amplia facultad de apreciación de los hechos que las mismas tienen para la adopción de las decisiones en el ejercicio de su potestad legislativa. Por consiguiente, la competencia del propio Tribunal para enjuiciar la validez de una disposición de Derecho derivado sobre la base de un pretendido error manifiesto de apreciación se limita esencialmente a examinar “... si, al ejercer dicha facultad..., dicho legislador incurrió en error manifiesto o desviación de poder o, también, si éste rebasó manifiestamente los límites de su facultad de apreciación”, sin por ello sustituir al legislador en el ejercicio de la misma³¹. Esta facultad de apreciación de las Instituciones no sólo se limita a la naturaleza y al alcance de las disposiciones que se deban adoptar, sino que se extiende también a la comprobación de los hechos y datos que motivan la adopción del acto legislativo. En este sentido, el control judicial de la validez de la disposición cuestionada “... requiere que las instituciones comunitarias de las que emane el acto controvertido puedan demostrar ante el Tribunal de Justicia que el acto fue adoptado mediante un ejercicio efectivo de su facultad de apreciación, el cual supone la toma en consideración de todos los datos y circunstancias pertinentes de la situación que se haya pretendido regular mediante el acto en cuestión”³². Así pues, la mera aportación de la documentación científica y técnica tomada formalmente en consideración por el Parlamento y el Consejo en relación con los efectos del MMT sobre la salud humana y el medio ambiente sirvieron al Tribunal de Justicia para rechazar de plano que dichas instituciones hubiesen incurrido en un error manifiesto de apreciación.

En relación con una posible vulneración de los principios de proporcionalidad y de cautela, después de recordar la formulación jurisprudencial del principio de proporcionalidad como principio general del Derecho comunitario, el Tribunal vuelve a ampararse en la amplia facultad discrecional del legislador de la Unión para establecer

³¹ *Ibid.*, § 28.

³² *Ibid.*, § 34.

que “... [s]ólo el carácter manifiestamente inadecuado de una medida adoptada..., en relación con el objetivo que tiene previsto seguir la institución competente, puede afectar a la legalidad de tal medida”³³. Así, habida cuenta de los objetivos fijados por el Tratado CE en materia de protección de la salud y de los consumidores y en materia de protección del medio ambiente –en cuyo ámbito el legislador comunitario está además vinculado por el principio de cautela–, el Tribunal estimó que el establecimiento de un límite de contenido de MMT en el combustible no es manifiestamente inadecuado. En particular, dada la escasa certidumbre científica en torno a los efectos del MMT sobre la salud y el medio ambiente, el enfoque progresivo de la limitación de su contenido en los carburantes y su sujeción a revisión en función del resultado de la evaluación de los riesgos de los aditivos metálicos en los combustibles encomendada a la Comisión Europea hasta finales de 2012, condujo al Tribunal a apreciar la conformidad de la disposición cuestionada con el principio de cautela.

La circunstancia de que el MMT sea el único aditivo metálico a base de manganeso utilizado en carburantes en la Unión Europea permitió al Tribunal de Justicia desestimar una posible vulneración del principio de igualdad de trato, en la medida en que –así las cosas– el legislador comunitario no estaba obligado a establecer límites respecto de otros aditivos metálicos no importados ni utilizados en la Unión. El Tribunal tampoco consideró que la sujeción de la limitación del contenido de MMT en carburantes a posible revisión, en función del resultado de la evaluación de los riesgos encargada a la Comisión, pudiese acarrear la vulneración del principio de seguridad jurídica.

³³ *Ibid.*, § 46.

Sumari: 1. Consideracions introductòries. 2. Recursos per incompliment (article 258 TFUE / exarticle 226 TCE). 2.1 Protecció d'aigües contra la contaminació produïda per nitrats procedents de fonts agràries. 2.2. Qualitat de les aigües de bany. 2.3. Conservació de la flora i de la fauna. 2.4. Gestió de residus. 2.5. Avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient. 2.6. Prevenció i control integrats de la contaminació. 3. Qüestions prejudicials (article 267 TFUE / exarticle 234 TCE). 3.1. Qüestions prejudicials d'interpretació. 3.2. Qüestions prejudicials de validesa.

1. Consideracions introductòries

En el període comprès entre l'1 de juny i el 30 de novembre de 2010, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictat sentència en onze afers relacionats amb el dret ambiental. D'aquestes sentències, nou es van dictar en el marc de procediments incoats per la Comissió Europea basant-se en l'article 258 TFUE contra uns quants estats membres per haver incomplert el dret de la Unió Europea amb relació a diferents directives en matèria de (1) protecció d'aigües contra la contaminació produïda per nitrats procedents de fonts agràries; (2) en matèria de qualitat de les aigües de bany; (3) de conservació de la flora i de la fauna; (4) de gestió de residus; (5) d'avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient, i (6) de prevenció i control integrats de la contaminació.

Les altres dues sentències es van dictar en el marc de sengles peticions de decisió prejudicial. En particular, la Sentència de 17 de juny de 2010, as. ac. C-105/09 i C-110/09, *Terre wallonne ASBL (C-105/09), Inter-Environnement Wallonie ASBL (C-110/09) c/ Région wallonne*, respon a les qüestions prejudicials plantejades pel Conseil d'État de Bèlgica sobre la interpretació de determinades disposicions de les directives 2001/42/CE i 91/676/CEE. D'altra banda, la Sentència de 8 de juliol de 2010, as. C-343/09, *Afton Chemical Limited c/ Secretary of State for Transport*, resol una qüestió prejudicial de validesa sobre l'article 1, apartat 8, de la Directiva 2009/30/CE, per la qual es modifica la Directiva 98/70/CE pel que fa a les especificacions de gasolina, dièsel i gasoil, s'introdueix un mecanisme per controlar i reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle.

2. Recursos per incompliment (article 258 TFUE/ exarticle 226 TCE)

2.1. Protecció d'aigües contra la contaminació produïda per nitrats procedents de fonts agrícoles

Ens ocuparem de la Sentència del Tribunal de Justícia (Gran Sala) de 29 de juny de 2010, as. C-526/08, Comissió Europea c/ Gran Ducat de Luxemburg. En aquesta sentència el Tribunal de Justícia es va pronunciar sobre el recurs per incompliment interposat per la Comissió Europea contra Luxemburg, en considerar que aquest estat membre no havia adaptat correctament el dret nacional —mitjançant els articles 6, 7 i 8 del Reglament granducal de 24 de novembre de 2000, sobre la utilització de fertilitzants nitrogenats en l'agricultura— als articles 4 i 5 de la Directiva 91/676/CE i als annexos II, part A, punts 1, 2, 5 i 6, i III, apartat 1, punts 1 i 2³⁴. Al marge de les al·legacions sobre el fons presentades en el marc de la seva resposta al dictamen motivat de la Comissió Europea, una vegada en fase jurisdiccional Luxemburg no va realitzar cap al·legació sobre la procedència del recurs, ni va sol·licitar-ne la desestimació. Al contrari, va basar la seva estratègia de defensa exclusivament en la inadmissibilitat, i va al·legar pel que és essencial la violació del principi de cosa jutjada i del principi non bis in idem, tenint en compte la identitat de fet i de dret entre el recurs de la Comissió i la Sentència del Tribunal de Justícia de 8 de març de 2001, as. C-266/00, Comissió Europea c/ Gran Ducat de Luxemburg³⁵. Aquesta al·legació, que va motivar l'atribució de l'afer a la Gran Sala, va ser desestimada pel Tribunal. Un cop admès el recurs, les al·legacions sobre el fons presentades per Luxemburg en l'escrit de dúplica es van desestimar per extemporànies; per consegüent, el Tribunal ho va resoldre exclusivament basant-se en els quatre motius incoats per la Comissió³⁶. Aquests motius, tots valorats pel Tribunal, són els següents:

1. En establir els períodes durant els quals no poden utilitzar-se fertilitzants als terrenys agrícoles, l'article 6 del Reglament granducal no amplia la prohibició als abonament

³⁴ Sentència, § 10.

³⁵ Rec. 2001, p. I-2073.

³⁶ Sentència, § § 49-51.

químics, i no preveu cap període de prohibició completa per als pastos. En aquest context, l'article 7 del Reglament granducal defineix de manera insuficient el marc de les excepcions a aquestes prohibicions, de manera incompatible amb la Directiva 91/676/CEE.

2. L'article 8 del Reglament granducal només imposa capacitat d'emmagatzemament de fem líquid i de purins de sis mesos com a mínim únicament per a instal·lacions noves, mentre que la Directiva 91/676/CEE amplia aquest estàndard també a instal·lacions existents.

3. Segons l'annex II, part A, punt 2 de la Directiva 91/676/CEE, la normativa nacional ha de regular l'aplicació de tota mena de fertilitzants a terres de terrenys inclinats i escarpats, mentre que l'article 6, part A, punt 5 del Reglament granducal només regula aquest aspecte respecte de fem líquid, purins i fangs líquids de depuradora, sense estendre aquesta prohibició als abonament químics.

4. Per acabar, Luxemburg no havia adoptat cap disposició relativa als procediments per aplicar a les terres, fertilitzants químics i fem que mantinguin pèrdues de nutrients en aigües en un nivell acceptable, segons exigeix l'annex II, part A, punt 6 de la Directiva 91/676/CEE.

2.2. Qualitat de les aigües de bany

En aquest cas, analitzarem la Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Cinquena) de 30 de setembre de 2010, as. C-481/09, Comissió Europea c/ República Txeca. El Tribunal de Justícia va declarar que la República Txeca havia incomplert les seves obligacions d'acord amb la Directiva 2006/7/CE³⁷ per no haver adoptat les disposicions legislatives, reglamentàries i administratives necessàries per adaptar el seu ordenament jurídic intern a la directiva en el termini establert en l'article 18 (24 de març de 2008). A aquests efectes, seguint la seva línia jurisprudencial molt constant, el Tribunal de Justícia únicament va considerar la situació de l'ordenament jurídic intern a la data de

³⁷ Directiva 2006/7/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de febrer de 2006, relativa a la gestió de la qualitat de les aigües de bany i per la qual es deroga la Directiva 76/160/CEE (DOUE, L 64, de 4 de març de 2006, pàg. 37-51).

l'expiració del termini fixat en el dictamen motivat de la Comissió Europea, sense prestar atenció a canvis ulteriors.

2.3. Conservació de la flora i de la fauna

En el període comprès en la crònica present, el Tribunal de Justícia ha dictat dues sentències relatives a recursos d'incompliment interposats per la Comissió contra Àustria i Itàlia, respectivament, per transposició insuficient o incorrecta de la Directiva 79/409/CEE, de 2 d'abril de 1979, relativa a la conservació de les aus silvestres³⁸ en la legislació estatal i regional. Es tracta de la Sentència Tribunal de Justícia (Sala Tercera) de 15 de juliol de 2010, as. C-573/08, Comissió Europea c/ República Italiana, i de la Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Segona) de 14 d'octubre de 2010, as. C-535/07, Comissió Europea c/ República d'Àustria.

No obstant això, ens interessa destacar les sentències adoptades pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea relatives a sengles recursos d'incompliment interposats contra Espanya i Itàlia, amb relació a la directiva hàbitats.

En primer lloc, destaquem la Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Quarta) de 20 de maig de 2010, as. C-308/08, Comissió Europea c/ Regne d'Espanya. Per mitjà d'aquesta sentència, el Tribunal de Justícia resol el recurs per incompliment interposat per la Comissió Europea contra Espanya, pel qual sol·licitava la declaració de l'incompliment de les obligacions que es deriven de la Directiva 92/43/CEE³⁹ (directiva hàbitats) per a aquest país, tal com es va entendre, segons la interpretació que s'hi va donar en les sentències de 13 de gener de 2005, as. C-117/03, Dragaggi i altres⁴⁰; i de 14 de setembre de 2006, as. C-244/05, Bund Naturschutz in Bayern i altres⁴¹, pel que fa al projecte de condicionament del camí rural de Villamanrique de la Condesa (Sevilla) a El Rocío (Huelva). En particular, la Comissió considerava que Espanya incomplia (1) l'obligació de no autoritzar cap intervenció que alteri significativament les característiques

³⁸ DOCE, L 103, de 25 d'abril de 1979, pp. 1-18.

³⁹ Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres (DOCE, L 206, de 22 de juliol de 1992, pp. 7-50).

⁴⁰ Rec, p. I-167.

⁴¹ Rec, p. I-8445.

ecològiques del Parc de Doñana, en tant que lloc d'interès comunitari (LIC), així com (2) l'obligació d'establir un sistema de control de les captures o sacrificis accidentals del linx ibèric, d'acord amb l'article 12.4 de la directiva hàbitats.

Per la seva banda, Espanya va al·legar en essència que la via de comunicació comarcal entre Villamanrique i El Rocío ja havia estat una via asfaltada abans de la catalogació del Parc de Doñana com a LIC, i que la intervenció es va limitar a la manutenció de la carretera, sense que s'hagués produït cap alteració significativa de les característiques ecològiques del lloc.

En la seva sentència, el Tribunal de Justícia va desestimar el recurs de la Comissió. En particular, el Tribunal va considerar que els elements de prova que li van ser sotmesos no permetien concloure que el projecte de condicionament del camí rural, acompanyat de determinades mesures correctores que es van executar encara durant la fase precontenciosa, constituís “en si mateix” una intervenció que comportés el risc de provocar la desaparició del linx ibèric i l'alteració de les característiques ecològiques del lloc⁴². Segons la consideració singular del Tribunal, les proves pericials aportades no demostrarien prou que el projecte en qüestió tingués “una incidència real en la fragmentación del hàbitat del lince ibérico en la comarca de Doñana”⁴³. D'altra banda, malgrat que la mort per atropellament és una de les principals causes de mortalitat del linx, i malgrat les proves aportades sobre l'increment de la velocitat mitjana de circulació per aquesta carretera, el Tribunal va considerar que l'absència de casos d'atropellament des de l'aplicació de les mesures de correcció del projecte de condicionament (fins al final de la fase escrita del procediment) li impedié considerar suficientment provada la seva incidència sobre el risc de desaparició del linx ibèric en aquest lloc⁴⁴. Per aquesta mateixa raó, va desestimar el segon motiu del recurs, això és, el suposat incompliment de l'article 12.4 de la directiva hàbitats.

En segon lloc, farem referència a la Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Quarta) de 10 de juny de 2010, as. C-491/08, Comissió Europea/República Italiana. En aquesta sentència, el Tribunal de Justícia estima el recurs interposat per la Comissió Europea

⁴² Sentència, § 52.

⁴³ *Ibid.*, § 36.

⁴⁴ *Ibid.*, § § 37-51.

contra Itàlia basant-se en l'article 226 TCE, en què sol·licita la declaració de l'incompliment de les obligacions que incumbeixen a l'estat membre esmentat en virtut de la Directiva 92/43/CEE (directiva hàbitats), pel que fa al projecte de complex turístic i immobiliari "Is Arenas", que afecta les espècies i els hàbitats del lloc d'interès comunitari (LIC) "Is Arenas". Concretament, la Comissió retreia a Itàlia que: (1) entre la proposta d'inscripció d'"Is Arenas" a la llista LIC al maig de 1995 i la inscripció formal⁴⁵ (19 de juliol de 2006), no havia adoptat les mesures de protecció necessàries per salvaguardar l'interès ecològic del lloc i, en particular, no hi havia prohibit cap intervenció susceptible de comprometre'n greument les característiques ecològiques (art. 10 TCE, amb relació a l'art. 6 directiva hàbitats); i (2) després del 19 de juliol de 2006, no havia adoptat les mesures apropiades per evitar el deteriorament dels hàbitats naturals i dels hàbitats d'espècies, ni les perturbacions que afecten les espècies per a les quals s'havia establert el LIC (art. 6.2 directiva hàbitats). El Tribunal va estimar el recurs de la Comissió, en què declarava l'incompliment d'Itàlia en tots els extrems indicats en el dictamen motivat i en el dictamen motivat complementari.

2.4. Gestió de residus

En aquest apartat, hem d'esmentar la Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Tercera) de 10 de juny de 2010, as. C-37/09, Comissió Europea c/ República Portuguesa. Per mitjà d'aquesta sentència, el Tribunal de Justícia estima parcialment el recurs interposat per la Comissió Europea contra Portugal, basant-se en l'article 226 TCE, en què al·lega l'incompliment de l'estat membre esmentat de les seves obligacions de conformitat amb la Directiva 2006/12/CE⁴⁶ i amb la Directiva 80/68/CEE⁴⁷, en relació amb els abocadors il·legals existents a les pedreres abandonades dos Limas, dos Linos i dos Barreiras, situades a la parròquia de Lourosa. El Tribunal va desestimar el recurs de la Comissió

⁴⁵ 2006/613/CE: Decisió de la Comissió, de 19 de juliol de 2006, per la qual s'adopta, de conformitat amb la Directiva 92/43/CEE del Consell, la llista de llocs d'importància comunitària de la regió biogeogràfica mediterrània [notificada amb el número C (2006) 3261] (DOUE, L 259, de 21 de setembre de 2006, pp. 1-104).

⁴⁶ Directiva 2006/12/CE del Parlament europeu i del Consell, de 5 d'abril de 2006, relativa als residus (DOUE, L 114, de 27 d'abril de 2006, pp. 9-21=.

⁴⁷ Directiva 80/68/CEE del Consell, de 17 de desembre de 1979, relativa a la protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació causada per determinades substàncies perilloses (DOCE, L 20, de 26 de gener de 1980, pàg. 43-48 ; edició especial en espanyol: cap. 15, vol. 2, p. 162.

quant al pretès incompliment de Portugal de les obligacions pel que fa als abocaments il·legals de residus en l'antiga pedrera dos Barreiras, en considerar que la Comissió no havia aportat elements de prova suficients que permetessin deduir que, en el moment d'expirar el termini assenyalat en el dictamen motivat, la situació de la pedrera fos tal que permetés afirmar que Portugal no havia complert les seves obligacions de conformitat amb les directives en qüestió⁴⁸. Respecte de les pedreres abandonades dos Limas i dos Linos, el Tribunal va estimar el recurs. En particular, va considerar que Portugal havia incomplert les seves obligacions pel que fa als aspectes següents:

1. L'adopció de mesures necessàries per garantir que els residus es valoraran o s'eliminaran sense posar en perill la salut de l'ésser humà i sense utilitzar procediments ni mètodes que puguin perjudicar el medi ambient (art. 4 Directiva 2006/12/CE), en la mesura que va considerar provat que les autoritats portugueses s'havien limitat a enterrar els residus dipositats il·legalment en les pedreres durant uns quants anys, fins al 2004, amb la qual cosa així van contribuir a prolongar una situació de dany ambiental significatiu ocasionat per la presència prèvia d'aquests residus⁴⁹;
2. L'adopció de disposicions necessàries perquè qui poseeixi residus els remeti a un recol·lector privat o públic o a una empresa, o s'ocupi ell mateix de valorar-los o eliminar-los (art. 8 Directiva 2006/12/CE), en la mesura que, segons la reiterada jurisprudència del Tribunal⁵⁰, el propietari d'un abocador il·legal s'ha de considerar "posseïdor" dels residus dipositats en el sentit de l'article 8 de la Directiva 2006/12/CE⁵¹;
3. L'adopció de mesures necessàries per limitar la introducció de determinades substàncies en aigües subterrànies a fi d'evitar-ne la contaminació (art. 3, b) i 5 Directiva 80/68/CEE, amb relació al seu annex, llista II). Des d'aquest punt de vista, el Tribunal va tenir en compte particularment que les autoritats portugueses no adoptessin en tot el període en què es van produir dipòsits il·legals, ni tampoc després de 2004, les

⁴⁸ Sentència, § 31.

⁴⁹ *Ibid.*, § § 38 i 39.

⁵⁰ Vid. en particular Sentència del Tribunal de Justícia de 9 de novembre de 1999, es. C-365/97, Rec, p. I-7773, § 108.

⁵¹ Sentència, § 54.

precaucions tècniques requerides per evitar la contaminació de les aigües subterrànies per aquestes substàncies, com la instal·lació d'una barrera protectora que impedisís el flux de residus líquids de la filtració de l'aigua⁵².

2.5. Avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient

En aquesta matèria, destaca la Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Vuitena) de 10 de juny de 2010, as. C-378/09, Comissió Europea c/ República Txeca. Per mitjà d'aquesta sentència, el Tribunal de Justícia resol un recurs d'incompliment interposat per la Comissió Europea contra la República Txeca basat en la transposició incorrecta dels tres primers paràgrafs de l'article 10 bis de la Directiva 85/337/CEE⁵³, segons va ser modificada per la Directiva 2003/35/CE⁵⁴. De conformitat amb aquesta disposició:

“Los Estados miembros garantizarán que, de conformidad con su Derecho interno, los miembros del público interesado:

- a) que tengan un interés suficiente, o subsidiariamente;*
- b) que sostengan el menoscabo de un derecho, cuando la legislación en materia de procedimiento administrativo de un Estado miembro lo imponga como requisito previo, tengan la posibilidad de presentar un recurso ante un tribunal de justicia o ante otro órgano independiente e imparcial establecido por la ley para impugnar la legalidad, en cuanto al fondo o en cuanto al procedimiento, de decisiones, acciones u omisiones que caigan dentro del ámbito de las disposiciones relativas a la participación del público de la presente Directiva.*

Los Estados miembros determinarán la fase en la que pueden impugnarse tales decisiones, acciones u omisiones.

Los Estados miembros determinarán, de manera coherente con el objetivo de facilitar al público interesado un amplio acceso a la justicia, lo que constituya el

⁵² *Ibíd.*, § 74-78.

⁵³ Directiva 85/337/CEE del Consell, de 27 de juny de 1985, relativa a l'avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient (DOCE, L 175, de 5 de juliol de 1985, p. 40).

⁵⁴ Directiva 2003/35/CE del Parlament europeu i del Consell, de 26 de maig de 2003, per la qual s'estableixen mesures per a la participació del públic en l'elaboració de determinats plans i programes relacionats amb el medi ambient i per la qual es modifiquen, pel que fa a la participació del públic i l'accés a la justícia, les directives 85/337/CEE i 96/61/CE del Consell (DOUE, L 156, de 25 de juny de 2003, pp. 17 - 25).

interés suficiente y el menoscabo de un derecho. Se considerará que toda organización no gubernamental que cumple los requisitos contemplados en el apartado 2 del artículo 1 tiene siempre el interés suficiente a efectos de la letra a) del presente artículo o acredita el menoscabo de un derecho a efectos de la letra b)”.

Segons l'article 6 de la Directiva 2003/35/CE, els estats membres havien de posar en vigor les mesures de transposició necessàries fins al 25 de juny de 2005. Al juliol de 2006, la Comissió Europea va advertir a la República Txeca que, tenint en compte les restriccions que comporta, la seva legislació nacional no reconeixia el dret de recurs contra les decisions, els actes i les omissions al conjunt del públic interessat en el sentit de l'article 1.2 de la Directiva 85/337/CEE, en particular pel que fa a les organitzacions no governamentals⁵⁵. La República Txeca no va qüestionar la posició de la Comissió Europea durant la fase precontenciosa. Davant les reiterades dificultats en la tramitació parlamentària del projecte legislatiu destinat a traslladar correctament la directiva en qüestió i, en última instància, el seu rebuig pel Parlament txec, la Comissió Europea va interposar el recurs. Seguint la seva jurisprudència constant en la matèria, el Tribunal de Justícia va admetre el recurs i va declarar l'incompliment per part de la República Txeca de les obligacions que li incumbeixen en virtut de la Directiva 85/337/CEE, segons va ser modificada per la Directiva 2003/35/CE, ja que no va traslladar correctament l'article 10 bis en el termini establert.

2.6. Prevenció i control integrats de la contaminació

En l'àmbit de la prevenció i del control integrats de la comunicació, ha de destacar-se la Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Cinquena) de 7 d'octubre de 2010, as. 49/10, Comissió Europea c/ República d'Eslovènia. En aquest afer, el Tribunal de Justícia resol un recurs per incompliment interposat per la Comissió Europea contra Eslovènia pel suposat incompliment de les obligacions que li incumbeixen de conformitat amb l'article 5.1 de la Directiva 2008/1/CE⁵⁶. Segons aquesta disposició, els estats membres

⁵⁵ Sentència, § 6.

⁵⁶ Directiva 2008/1/CE del Parlament europeu i del Consell, de 15 de gener de 2008, relativa a la prevenció i al control integrats de la contaminació (versió codificada) (DOUE, L 24, de 29 de gener de 2008, pp. 8-29).

han d'adoptar *“las medidas necesarias para que las autoridades competentes velen, mediante autorizaciones extendidas de conformidad con los artículos 6 y 8 o, de forma adecuada, mediante la revisión de las condiciones y, en su caso, su actualización, por que las instalaciones existentes sean explotadas con arreglo a los requisitos previstos en los artículos 3, 7, 9, 10, 13, en el artículo 14, letras a) y b), y en el artículo 15, apartado 2, a más tardar el 30 de octubre de 2007”*. Als efectes de la directiva, ha d'entendre's per *“instal·lació existent” “una instalación que, a fecha de 30 de octubre de 1999 y en el marco de la legislación existente antes de dicha fecha, estaba en funcionamiento o había sido autorizada o había sido objeto, en opinión de la autoridad competente, de una solicitud completa de autorización, siempre que dicha instalación se hubiera puesto en servicio a más tardar el 30 de octubre de 2000”* (art. 2.4 Directiva 2008/1/CE).

En la data indicada en l'article 5.1, només el 12% de les *“instal·lacions existents”* eslovenes disposaven de l'autorització corresponent. Tot i que l'Administració eslovena va incrementar les seves capacitats i va accelerar el tràmit de les autoritzacions pendents, 57 de les 157 *“instal·lacions existents”* encara funcionaven sense autorització en expirar el termini atorgat en el dictamen motivat de la Comissió. Un cop en fase contenciosa, d'acord amb la seva jurisprudència constant, el Tribunal de Justícia no va estimar les al·legacions de l'estat membre relatives a les dificultats d'ordre intern com la justificació del retard en el compliment de les obligacions comunitàries. Per tant, el Tribunal va declarar que, no havent adoptat en el termini prescrit totes les mesures necessàries en matèria d'autorització de les instal·lacions industrials, de conformitat amb l'article 5.1 de la Directiva 2008/1/CE, Eslovènia havia incomplert les seves obligacions d'acord amb la directiva.

3. Qüestions prejudicials (article 267 TFUE / exarticle 234 TCE)

3.1. Qüestions prejudicials d'interpretació

En el període que comprèn aquesta crònica, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea s'ha pronunciat, amb caràcter prejudicial, sobre l'àmbit d'aplicació de la Directiva

2001/42/CE, relativa a l'avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient.

Esmentem la Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Quarta) de 17 de juny de 2010, peticions de decisió prejudicial plantejades pel Conseil d'État (Bèlgica), as. ac. C-105/09 i C-110/09, Terre wallonne ASBL (C-105/09), Inter-Environnement Wallonie ASBL (C-110/09) c/ Région wallonne. En el litigi principal les parts demandants van sol·licitar davant el Conseil d'État de Bèlgica l'anul·lació del decret de 17 de març de 2005, adoptat pel Govern való en transposició de l'article 5 de la Directiva 91/676/CEE, relativa a la protecció de les aigües contra la contaminació produïda per nitrats utilitzats en l'agricultura, en la mesura que estableix un programa d'acció relatiu a la gestió del nitrogen per a l'agricultura en zones vulnerables, que no es va sotmetre a avaluació mediambiental d'acord amb la Directiva 2001/42/CE⁵⁷. En aquest context, el Conseil d'État va formular les qüestions prejudicials següents:

“1) ¿Es el programa de gestión del nitrógeno relativo a las zonas vulnerables designadas, prescrito por el artículo 5, apartado 1, de la [Directiva 91/676] un plan o programa en el sentido del artículo 3, apartado 2, [letra] a), de la [Directiva 2001/42], destinado a los sectores de la agricultura, la silvicultura, la pesca, la energía, la industria, el transporte, la gestión de residuos, la gestión de recursos hídricos, las telecomunicaciones, el turismo, la ordenación del territorio urbano y rural o la utilización del suelo, y establece el citado programa de gestión el marco para la autorización en el futuro de proyectos enumerados en los anexos I y II de la [Directiva 85/337]?”

2) ¿Es el programa de gestión del nitrógeno relativo a las zonas vulnerables designadas, prescrito por el artículo 5, apartado 1, de la [Directiva 91/676] un plan o programa en el sentido del artículo 3, apartado 2, [letra] b), de la [Directiva 2001/42] para el que, dados los efectos que puede producir en determinados lugares, se requiere una evaluación en virtud de los artículos 6 y 7 de la [Directiva 92/43], en particular cuando el programa de gestión del nitrógeno de que se trata se aplica a todas las zonas vulnerables designadas de la Región Valona?”

3) ¿Es el programa de gestión del nitrógeno relativo a las zonas vulnerables designadas, prescrito por el artículo 5, apartado 1, de la [Directiva 91/676] un

⁵⁷ Directiva 2001/42/CE del Parlament europeu i del Consell, de 27 de juny de 2001, relativa a l'avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient (DOCE, L 197, de 21 juliol 2001, p. 30-37.

plan o programa, distinto de los referidos en el artículo 3, apartado 2, de la [Directiva 2001/42], que establece el marco para la autorización en el futuro de proyectos, para los que los Estados miembros deben determinar, en virtud del artículo 3, apartado 4 [de la Directiva 2001/42], si pueden tener efectos significativos en el medio ambiente, de acuerdo con [el artículo 3, apartado 5, de dicha Directiva]?”⁵⁸.

El Tribunal va contestar afirmativament a la primera qüestió remesa, per la qual cosa no va caldre respondre a les altres. Partint de la constatació que l'objectiu essencial de la Directiva 2001/42/CE consisteix a sotmetre a avaluació mediambiental els plans i els programes que puguin tenir efectes significatius en el medi ambient, durant la seva preparació i abans de la seva adopció, establint a aquests efectes normes mínimes sobre la preparació de l'informe, l'aplicació del procediment de consulta, la consideració dels resultats de l'avaluació mediambiental i el subministrament d'informació sobre la decisió finalment adoptada, el Tribunal, en primer lloc, va analitzar si els programes d'acció elaborats d'acord amb l'article 5.1 de la Directiva 91/696/CEE havien de considerar-se com a “plans i programes” en el sentit de l'article 2, a) de la Directiva 2001/42/CE; i, en segon lloc, si reunien els requisits exigits en l'article 3.2, a).

Respecte de la consideració dels programes d'acció com a “plans i programes” en el sentit de l'article 2, a) de la Directiva 2001/42/CE, el Tribunal es basa, d'una banda, en la interpretació literal de la disposició, i, de l'altra, en l'exclusió dels programes d'acció previstos en l'article 5 de la Directiva 91/696/CEE de l'àmbit d'aplicació de la Directiva 2003/35/CE⁵⁹, per concloure afirmativament la inclusió en aquesta categoria. Pel que fa als requisits exigits en l'article 3.2, a) de la Directiva 2001/42/CE, el Tribunal va estimar que els programes d'acció previstos en l'article 5.1 de la Directiva 91/696/CEE es corresponen plenament amb un dels sectors enumerats en la disposició i va apreciar l'existència d'indicis —que ha de considerar el jutge nacional— per determinar que constitueixen, d'altra banda, —segons exigeix també l'article 3.2, a) Directiva 2001/42— el marc per autoritzar en el futur els projectes enumerats en els annexos I i II de la

⁵⁸ Sentència, § 30.

⁵⁹ Cf. art. 2.5 i annex I de la Directiva 2003/35/CE del Parlament europeu i del Consell, de 26 de maig de 2003, per la qual s'estableixen mesures per a la participació del públic en l'elaboració de determinats plans i programes relacionats amb el medi ambient i per la qual es modifiquen, pel que fa a la participació del públic i l'accés a la justícia, les directives 85/337/CEE i 96/61/CE del Consell (DOUE, L 156, de 25 de juny de 2003, pp. 17-25).

Directiva 85/337/CEE. Per tant, el Tribunal de Justícia va estimar que “*un programa de acción adoptado en virtud del artículo 5, apartado 1 de la Directiva 91/676 es, en principio, un plan o un programa contemplado en el artículo 3, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/42 en la medida en que constituye un «plan» o un «programa» en el sentido del artículo 2, letra a) de esta última Directiva, y contiene medidas cuyo respeto es determinante para autorizar la realización de proyectos enumerados en los anexos I y II de la directiva 85/335*”⁶⁰.

3.2. Qüestions prejudicials de validesa

En el període que comprèn aquesta crònica, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha resolt una qüestió prejudicial de validesa rellevant en l'àmbit de la legislació de la Unió Europea en matèria de contaminació atmosfèrica.

Es tracta de la Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Quarta) de 8 de juliol de 2010, as. C-343/09, Afton Chemical Limited c/ Secretary of State for Transport. Mitjançant aquesta sentència, el Tribunal de Justícia respon a una sèrie de qüestions prejudicials plantejades per la High Court of Justice of England and Wales, Queen's Bench Divisió (Administrative Court) en el marc del recurs de control de legalitat (judicial review) interposat per Afton Chemical Limited en relació amb la intenció i l'obligació del Govern del Regne Unit d'adaptar el dret intern a la Directiva 2009/30/CE⁶¹. En particular, les qüestions prejudicials remeses per l'òrgan jurisdiccional anglès versaven sobre la validesa de l'article 1.8 de la directiva, en la mesura que insereix l'article 8 bis en la Directiva 98/70/CE⁶², que té com a objecte la limitació substancial de l'ús de metilciclopentadienil tricarbonil de manganès (MMT) —substància produïda per la part

⁶⁰ Sentència, § 55.

⁶¹ Directiva 2009/30/CE del Parlament europeu i del Consell, de 23 d'abril de 2009, per la qual es modifica la Directiva 98/70/CE en relació amb les especificacions de la gasolina, el dièsel i el gasoil, s'introdueix el mecanisme per controlar i reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle, es modifica la Directiva 1999/32/CE del Consell pel que fa a les especificacions del combustible utilitzat pels vaixells de navegació interior i es deroga la Directiva 93/12/CEE (DOUE , L 140, de 5 de juny de 2009, pp. 88-113).

⁶² Directiva 98/70/CE del Parlament europeu i del Consell de 13 d'octubre de 1998 relativa a la qualitat de la gasolina i del gasoil i per la qual es modifica la Directiva 93/12/CEE del Consell (DOCE, L 350, de 28 desembre 1998, pp. 58-68).

demandant en el litigi principal— en els combustibles. Concretament, les qüestions prejudicials remeses es van plantejar en els termes següents:

“Con respecto a las disposiciones sobre aditivos metálicos contenidas en la Directiva 2009/30/CE [...]:

1) Por lo que se refiere a la parte del artículo 1, apartado 8, que inserta un nuevo artículo 8 bis, apartado 2 en la Directiva 98/70, limitando el uso del [MMT] en los combustibles a 6 mg de manganeso por litro a partir del 1 de enero de 2011 y a 2 mg a partir del 1 de enero de 2014, ¿es la imposición de dichos límites:

- a) contraria a Derecho por estar basada en un error manifiesto de apreciación;*
- b) contraria a Derecho por no respetar las exigencias del principio de cautela;*
- c) contraria a Derecho por adolecer de falta de proporcionalidad;*
- d) contraria a Derecho por vulnerar el principio de seguridad jurídica?*

2) Por lo que se refiere a la parte del artículo 1, apartado 8, que inserta un nuevo artículo 8 bis, apartados 4 a 6, en la Directiva 98/70, exigiendo el etiquetado de todos los combustibles que contengan aditivos metálicos con la frase «Contiene aditivos metálicos», ¿es la imposición de dicho requisito de etiquetado:

- a) contraria a Derecho por estar basada en un error manifiesto de apreciación;*
- b) contraria a Derecho por adolecer de falta de proporcionalidad?”⁶³.*

El Tribunal de Justícia va respondre negativament a ambdues qüestions. En particular, ens interessa ressaltar el raonament que es va fer en abordar la primera de les qüestions remeses. Quant a la possible concurrència d'un error manifest d'apreciació dels fets científics i tècnics per part de les institucions de la Unió Europea (en particular, el Parlament i el Consell), el Tribunal de Justícia va partir del reconeixement de l'àmplia facultat d'apreciació dels fets que tenen per adoptar decisions en l'exercici de la seva potestat legislativa. Per això, la competència del mateix Tribunal per enjudiciar la validesa d'una disposició de dret derivat basant-se en un pretès error manifest d'apreciació, es limita essencialment a examinar “*si, al ejercer dicha facultad [...], dicho legislador incurrió en error manifiesto o desviación de poder o, también, si éste rebasó manifiestamente los límites de su facultad de apreciación*”, sense haver de substituir per això el legislador en l'exercici⁶⁴. Aquesta facultat d'apreciació de les

⁶³ Sentència, § 9.

⁶⁴ *Ibíd.*, § 28.

institucions no sols es limita a la natura i a l'abast de les disposicions que s'hagin d'adoptar, sinó que s'estén també a la comprovació dels fets i de les dades que motiven adoptar l'acte legislatiu. En aquest sentit, el control judicial de la validesa de la disposició qüestionada “*requiere que las instituciones comunitarias de las que emane el acto controvertido puedan demostrar ante el Tribunal de Justicia que el acto fue adoptado mediante un ejercicio efectivo de su facultad de apreciación, el cual supone la toma en consideración de todos los datos y circunstancias pertinentes de la situación que se haya pretendido regular mediante el acto en cuestión*”⁶⁵. Així doncs, la mera aportació de la documentació científica i tècnica presa formalment en consideració pel Parlament i pel Consell pel que fa als efectes de l'MMT sobre la salut humana i sobre el medi ambient, va servir al Tribunal de Justícia per rebutjar de ple el fet que les institucions haguessin incorregut en un error manifest d'apreciació.

Amb relació a la possible vulneració dels principis de proporcionalitat i de cautela, després de recordar la formulació jurisprudencial del principi de proporcionalitat com a principi general del dret comunitari, el Tribunal torna a emparar-se en l'àmplia facultat discrecional del legislador de la Unió per establir que “[s]ólo el carácter manifestamente inadecuado de una medida adoptada [...], en relación con el objetivo que tiene previsto seguir la institución competente, puede afectar a la legalidad de tal medida”⁶⁶. Així, tenint en compte els objectius fixats pel Tractat CE en matèria de protecció de la salut i dels consumidors i en matèria de protecció del medi ambient —en l'àmbit dels quals el legislador comunitari està a més a més vinculat pel principi de cautela—, el Tribunal va estimar que establir límit de contingut d'MMT en el combustible no és manifestament inadequat. En particular, atesa l'escassa certesa científica entorn dels efectes de l'MMT sobre la salut i el medi ambient, l'enfocament progressiu de la limitació del seu contingut en els carburants i la subjecció a revisió en funció del resultat de l'avaluació dels riscos dels additius metàl·lics en els combustibles encomanada a la Comissió Europea fins al final de 2012, va menar el Tribunal a apreciar la conformitat de la disposició qüestionada amb el principi de cautela.

⁶⁵ *Ibíd.*, § 34.

⁶⁶ *Ibíd.*, § 46.

La circumstància que l'MMT sigui l'únic additiu metàl·lic a còpia de manganès utilitzat en carburants a la Unió Europea va permetre que Tribunal de Justícia desestimés la possible vulneració del principi d'igualtat de tracte, en la mesura que —així les coses— el legislador comunitari no estava obligat a establir límits respecte d'altres additius metàl·lics no importats ni utilitzats a l'Unió. El Tribunal tampoc no va considerar que la subjecció de la limitació del contingut de MMT als carburants que possiblement s'han de revisar en funció del resultat de l'avaluació de riscos encarregada a la Comissió, pogués vulnerar el principi de seguretat jurídica.